

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**  
**MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**

<b>PROCESO</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>MAURICIO ANDRÉS PÉREZ JARAMILLO</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. - EMVARIAS E.S.P. y FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN – FUNTRAEV</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN</b>
<b>RADICADO</b>	<b>05001-31-05-007-2023-00009-01</b>
<b>SEGUNDA INSTANCIA</b>	<b>NULIDAD PROCESAL – Falta de Jurisdicción</b>
<b>DECISIÓN</b>	<b>CONFIRMA</b>

**AUTO INTERLOCUTORIO No. 124**

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No. 009 de 2024, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. - EMVARIAS E.S.P.** contra el Auto del 23 de febrero de 2024, proferido por el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, a través del cual negó la nulidad propuesta por aquella parte.

**ANTECEDENTES**

El señor **MAURICIO ANDRÉS PÉREZ JARAMILLO** promovió proceso Ordinario Laboral en contra del **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. - EMVARIAS E.S.P. y FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN – FUNTRAEV**, a fin de que: **1)** Se declare que, por efectos de la primacía de la realidad sobre las formas, la sociedad **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. - EMVARIAS E.S.P.** fue su verdadero empleador desde el 31 de octubre de 2011 hasta el 21 de junio de 2022, y la **FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN – FUNTRAEV** ha fungido como simple intermediaria dentro de dicha relación. **2)** En consecuencia, solicitó declarar que tiene derecho al reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demás acreencias dejadas de cancelar o pagadas deficitariamente, en

aplicación del principio de igualdad, de acuerdo con los montos cancelados a los trabajadores con vínculo directo a **EMVARIAS S.A. E.S.P.** y que despliegan el mismo cargo. **3)** De igual forma, reclamó declarar que **FUNTRAEV** es solidariamente responsable de las obligaciones que lleguen a reconocerse en su favor.

Consecuencia de lo anterior, petición: **4)** Que se ordene el reajuste de todos los conceptos percibidos durante su vinculación a **EMVARIAS S.A. E.S.P.** a través de **FUNTRAEV**, en los mismos términos del personal contratado directamente por la primera. **5)** De otro lado, pidió el pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 CST y la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, junto con la indexación de las sumas resultantes (Archivos 02 y 07 ED).

Mediante Auto del 23 de junio de 2023, el Juzgado de primera instancia admitió la demanda, y dispuso la vinculación al presente trámite de **COLPENSIONES** (Archivo 08 ED).

Notificadas las entidades accionadas y la vinculada, procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (Archivo 14, 16 y 17 ED), réplicas que a través de Auto del 12 de enero de 2024 fueron admitidas (Archivo 20 ED).

Posteriormente, el apoderado de **EMVARIAS S.A. E.S.P.** solicitó declarar la nulidad de lo actuado, tras considerar que en procesos idénticos, la Corte Constitucional ha determinado que la competencia para asumir el conocimiento corresponde a la *Jurisdicción Contencioso Administrativa*, postura que han asumido otros Juzgados Laborales de Medellín, acogiendo para tal efecto lo considerado por el Alto Tribunal en Auto 492 de 2021, en el cual se separa de la posición que traía la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, motivada en que el análisis de los factores orgánico y funcional propios de las categorías de empleado público y trabajador oficial constituye un examen de fondo de la controversia, ajeno al momento de definición de jurisdicción y competencia, el cual debe ser agotado por el Juez Administrativo, postura reiterada en Autos 054 de 2023 y 1377 de 2023.

Por tal motivo, solicitó declarar la *falta de jurisdicción* y su consecuente remisión al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín (Archivo 22 ED).

### PROVIDENCIA APELADA

A través de Auto del 23 de febrero de 2024 la Juez de primer grado decidió negar la nulidad propuesta por la pasiva, tras considerar que la postura de la Corte Constitucional plasmada en los Autos 1170 de 2021 y 1377 de 2023, no tenía cabida en el asunto bajo estudio, como quiera que, en los casos analizados por el Órgano de Cierre, se discutió la legalidad de un contrato estatal, siendo necesario analizar el actuar de la empresa a la luz del artículo 104 CPACA.

Adicionalmente, manifestó que, en esa clase de procesos, regularmente se ataca la validez de actos administrativos en los que la administración no accede al reconocimiento de la relación laboral con el servidor, aunado a que es el Juez Administrativo el encargado de revisar si, al tenor del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la labor contratada con un tercero podía o no ser ejecutada por personal de la planta de la entidad.

En contraste con ello, afirmó la Juzgadora que, en el actual asunto, lo perseguido por el demandante es que, a través del principio de primacía de la realidad sobre las formas, se declare la existencia de una relación laboral con la empresa usuaria, escenario que ha sostenido la Corte Constitucional, debe ser conocido por el Juez del Trabajo (Archivo 26 ED).

### RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial del **EMVARIAS S.A. E.S.P.** interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, insistiendo en que la pretensión principal de la demanda se fundamente en los contratos de prestación de servicios suscritos entre su defendida y la “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA” (sic), para de esa forma tener a la primera como verdadera empleadora, y a esta última como mera intermediaria.

Acto seguido, reiteró los argumentos esbozados en la proposición de la nulidad, a efectos de recabar en la procedencia de remitir las diligencias al Juez Administrativo (Archivo 27 ED).

Al resolver la reposición, el Juzgado de primer grado argumentó que en contravía de lo aducido por el recurrente, no se formula una discusión relativa a la existencia de contratos de prestación de servicios, sino que el demandante fungió como un empleado de la **FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÓN – FUNTRAEV - ANTIOQUIA** donde se desempeñó como conductor, cargo que afirma, hace parte de la misión de **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.**, es decir, reclama la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 CST a fin de obtener el reajuste de las acreencias laborales percibidas en el tiempo en que laboró en los términos anotados en la demanda, controversia que en efecto, debe ser resuelta por el Juez Laboral. Ante la negativa a reponer la decisión confutada, concedió la apelación Archivo 28 ED.

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término otorgado, el apoderado del **DEMANDANTE** solicitó confirmar la providencia de primer grado, para lo cual argumentó que la Juez de primer grado da una correcta interpretación a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en Autos A-1170 de 2021 y A-1377 de 2023, en atención a que lo perseguido en el proceso no tiene que ver con la primacía de la realidad en punto de contratos estatales, sino que se declare la existencia de una relación laboral entre su defendido y la empresa usuaria, relación en la que intervino una empresa intermediaria, asunto que, al versar sobre el estudio del contrato de un trabajador oficial, la competencia de su estudio corresponde al Juez Laboral, de conformidad con lo reglado en el artículo 2° CPLSS, como quedó definido en la decisión apelada (Archivo 04 ED Tribunal).

Por su parte, la mandataria de **EMVARIAS S.A. E.S.P.** reiteró los argumentos esbozados en la sustentación de la alzada, insistiendo en que el conocimiento del asunto debe ser asumido por el Juez Administrativo (Archivo 03 ED Tribunal).

## PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico en el presente asunto se concreta a establecer, si de acuerdo con lo pretendido por el señor **MAURICIO ANDRÉS PÉREZ JARAMILLO**, procede declarar la nulidad por *falta de jurisdicción* propuesta por **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, y, en consecuencia, se deberá remitir el proceso a los Juzgados administrativos a fin de que asuman su conocimiento.

## CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que, en principio, por virtud de lo reglado en el numeral 6° del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre nulidades procesales es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para resolver la alzada propuesta. En ese sentido, habrá de resolverse el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

La disyuntiva traída a esta instancia radica principalmente en que, en atención a lo pedido por el accionante, la demandada **EMVARIAS S.A. E.S.P.** arguye que la competente para dirimir esta causa abierta, es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, planteamiento que para el Juzgado de primer grado no tiene cabida, en tanto considera que está legitimado para resolver de fondo del asunto.

Visto lo anterior, y para resolver el conflicto suscitado, huelga anotar que lo pretendido por el señor **MAURICIO ANDRÉS PÉREZ JARAMILLO** radica principalmente en que, se declare que durante el tiempo en que prestó labores como conductor al servicio de **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, tercerizado a través de la **FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN – FUNTRAEV – ANTIOQUIA**, la primera entidad fungió en realidad como su empleadora, y la segunda como simple intermediaria, al tenor de lo reglado en el artículo 35 CST, imponiéndose condenas económicas a la primera, producto de otorgarle el reajuste de las acreencias laborales, en los mismos términos en que son reconocidas a sus trabajadores directos, obligaciones respecto de las cuales pidió tener como responsable solidaria a la citada fundación.

Bajo esa idea, conforme lo argüido por el recurrente, quien repele la competencia del Juez Laboral, por tratarse **EMVARIAS S.A. E.S.P.** de una entidad del ramo público, debe anotarse que, por virtud del artículo 2° del CPLSS, modificado por la Ley 712 de 2001, la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral, conoce de: “(...) 4. *Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. (...)*”.

De igual modo, en relación con los conflictos surgidos entidades de derecho público y aquellos que tiene en si la condición de empleados públicos, según la intención del legislador, corresponde, como regla general, dirimirlos a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el numeral 4° del artículo 104 CPACA, el cual señala que será de su conocimiento: “*además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa*”. Y de

manera especial, de los procesos **“relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”**.

La anterior reseña sirve para tener claro que, si la controversia inmiscuye, por ejemplo, a una entidad de derecho público y a un *trabajador oficial*, debe ser resuelta por el Juez del Trabajo, pero, en cambio, si la disyuntiva tiene en este último extremo a un *empleado público*, es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la encargada de darle curso.

Bajo el anterior panorama, en el particular la parte demandante predica que existió una verdadera relación de trabajo con la empresa **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, súplica de la cual se colige que su objetivo lleva implícita la intención inequívoca de que se considere la existencia de un contrato de trabajo, por efectos tuitivos de la primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 CN), proposición según la cual, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la citada entidad, obliga a que previo a resolver las pretensiones económicas de la demanda, el juez estudie la calidad de *empleado público* o *trabajador oficial* del demandante, punto que exige elementos de juicio con la prueba aportada para decidir de fondo si entre los contendientes en realidad la vinculación aducida corresponde a las condiciones esbozadas en la demanda, lo que trasluce en que es este un punto que debe ser definido en la Litis.

En ese orden de ideas, es pertinente reseñar que en algunos casos la mera afirmación de la parte acerca de la existencia de un contrato de trabajo no define la competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, dado que, tratándose de entidades públicas, se hace imperativo con las pruebas arrimadas a la Litis y las definiciones legales sobre la naturaleza de los empleos públicos, establecer la categoría del servidor, pero esto, se itera, en los eventos en que el punto de discusión del proceso no es precisamente el carácter de la vinculación laboral. Así lo ha dado a entender la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2447-2020, donde expuso: “(...) *si bien la afirmación de la existencia de un contrato de trabajo le permite a la jurisdicción ordinaria abordar el conocimiento de un asunto, ello no excluye que se deba determinar, tratándose de entidades públicas, que se trataba de un verdadero trabajador oficial, ello de acuerdo con las pruebas del proceso y con las directrices legales trazadas sobre la materia (...)*”.

Luego, en sentencia SL3266-2022, en dirección a lo considerado por el Juez de instancia, esa Alta Corte reafirmó su criterio en esta clase de controversias, al reiterar que, ante disyuntivas con entidades públicas, disputándose la naturaleza del servidor, el Juzgador de turno deberá verificar si, en efecto, la vinculación se dio en los términos alegados, pues de lo contrario la decisión de fondo tendría necesariamente que ser absolutoria: “(...) *La Corte ha explicado, en igual norte al que lo considero el juez de la apelación, que para asumir el conocimiento del asunto «[...] basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmación, al Juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y sólo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato», razón que ha conllevado a precisar que en ese escenario es imprescindible demostrar que el accionante ejerció las actividades que están catalogadas en la ley como de aquellas que ejecutan los trabajadores oficiales (CSJ SL21087-2017, que reitera lo decantado en la CSJ SL603-2017, que a su vez recordó lo considerado en las CSJ SL9315-2016; CSJ SL10610-2014 y CSJ SL, 18 mar. 2003, rad. 20173) (...)*” (Negrilla y Subraya de la Sala).

Dicha postura del Alto Tribunal Ordinario está en dirección a lo definido por la Corte Constitucional en Autos A-815 de 2022 y A-078 de 2023.

Frente a ello, al margen de lo considerado por la Corte Constitucional en las providencias reseñadas por el recurrente (Autos 054 de 2023 y 1377 de 2023), advierte la Sala que ya esa misma Corporación ha tenido la oportunidad de analizar un caso de ribetes similares, en el cual se pretendía tener por desnaturalizado un contrato misional, y declarar como verdadero empleador a **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, decantando que, en asuntos donde se inmiscuya a entidades en las que **por regla general sus colaboradores tienen la connotación de trabajadores oficiales**, estos procesos deben ser conocidos por el Juez Laboral.

Para el efecto, consideró en Auto A-2579 de 2023<sup>1</sup> que:

*“(…) La Corte también se ha pronunciado sobre la competencia para conocer de los procesos en que un empleado en misión vinculado laboralmente a una empresa de servicios temporales pretende el reconocimiento de una relación de trabajo con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública. En esos casos, la Corte ha resaltado que el encubrimiento de una relación laboral con el Estado puede arriesgar los derechos laborales de los trabajadores en misión, cuyo vínculo con las empresas de servicios temporales se habría desnaturalizado. De esa manera, para definir cuál es la jurisdicción que debe conocer del asunto, es necesario acudir a las reglas generales de competencia: si se alega el encubrimiento de un contrato de trabajo entonces la competente es la jurisdicción ordinaria laboral; mientras que, si se omitió la formalización de una relación legal y reglamentaria, la competente será la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*

*En dicha oportunidad, esta Corporación consideró que la jurisdicción ordinaria especialidad laboral era la competente para conocer el asunto y fijó como regla de decisión: “la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer los procesos en que un empleado en misión reclama (i) el reconocimiento de una relación laboral con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública cuya regla general de vinculación es la de trabajador oficial, y, producto de lo anterior, (ii) el pago de acreencias laborales de manera solidaria tanto a la empresa de servicios temporales como a la usuaria. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 105 del CPACA y el numeral 1 del artículo 2 del CPTSS (…)” (Subraya y Negrilla de la Sala).*

Así entonces, verificado lo anterior, y teniendo en consideración que dentro de la estructura organizacional de **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, justamente se cataloga el cargo de “conductor” - función realizada por el accionante -, dentro del grupo de trabajadores oficiales<sup>2</sup>, es claro que el Juez Laboral guarda competencia para desatar el actual litigio, debiendo confirmarse la decisión de primer grado.

<sup>1</sup> El cual reiteró lo considerado en Auto A-1728-2023

<sup>2</sup> [www.emvarias.com.co/emvarias/estructuraorganizacional](http://www.emvarias.com.co/emvarias/estructuraorganizacional) .

“Trabajadores Oficiales: Por la naturaleza técnica, administrativa y subordinada de sus funciones, estas se asignan por reglamento, manuales generales y específicos de funciones. Actualmente, EMVARIAS, cuenta con una planta de personal de 250 trabajadores oficiales. Entre ellos están: Los profesionales, Técnicos, Auxiliares, Encargadas de Aseo, Conductores, Recolectores y Peones de Aseo.”

Las costas de esta instancia están a cargo del ente apelante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMLV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** el Auto adiado del 23 de febrero de 2024 proferido por el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, a través del cual se negó la solicitud de nulidad formulada por **EMVARIAS S.A. E.S.P.**

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo del **EMVARIAS S.A. E.S.P.**, incluyendo como agencias la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 074 del 02 de mayo de 2024

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>